



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: Acción de Repetición
DEMANDANTE: Hospital San Rafael de Tunja.
DEMANDADO: Pedro Enrique Jiménez Farfán y otros.
RADICACIÓN: 15001 3333 004 **2018 00078 00**

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, se encuentra para resolver sobre la Admisión.

I. ADMISIÓN DE LA DEMANDA

1. Medio de Control:

El Hospital San Rafael de Tunja, a través de apoderado, promovió demanda de repetición en contra de los señores Pedro Enrique Jiménez Farfán, Saulo Guarín Cortés con el fin de que se les declare civil y patrimonialmente responsables en su condición de médicos tratantes del señor José Crisóstomo Rodríguez Rojas, por el pago de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2015 por el Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa en el que resultó condenado en la entidad accionante al pago de indemnización por daño moral y emergente.

2. Presupuestos del medio de Control:

2.1. Jurisdicción:

El artículo 104 C.P.A.C.A, dispone que la Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

2.2. De la Competencia:

El numeral 8 del artículo 155 C.P.A.C.A que habla sobre la Competencia de los jueces administrativos en primera instancia establece:

“los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

8. De las acciones de repetición que el estado ejerza contra los servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo en Única Instancia.”

En el presente asunto el **Hospital San Rafael de Tunja**, estimó la cuantía en la suma de \$280.830.873, es decir, que la cuantía no excede los quinientos salarios mínimos (500 SMLMV) para que sea competencia del Tribunal: Así mismo, se evidencia que el presente asunto no está atribuido al Consejo de Estado en única instancia (numeral 13 del artículo 149 C.P.A.C.A), razones por las cuales queda claro que este Despacho es competente por el factor funcional para conocer del presente asunto.

Es necesario resaltar que el medio de control de repetición debe tramitarse como una reparación directa, tiene las mismas características y trámite, tal y como lo consagra la Ley 678 de 2001 en su artículo 10º. *“la acción de repetición se tramitara de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo para las acciones de Reparación Directa”*. Por estas razones, para el caso sub examine, frente a las reglas definidas para establecer la competencia territorial, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 156 numeral 6 del C.P.A.C.A, que establece lo siguiente:

“En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.”

Según la narración de los hechos el lugar donde se produjo la situación fáctica fue el municipio de Tunja, razón por la cual se puede inferir que este Despacho es competente para conocer del presente medio de control, por el factor territorial.

3. Requisitos de Procedibilidad en acciones de Repetición

3.1. Cancelación previa de lo pagado en una condena.

El numeral 5 del art. 161 del C.P.A.C.A establece lo siguiente:

“5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado en una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que previamente se haya realizado dicho pago.”

En este caso, se aporta comprobante de egreso No. 55487 en el que consta que se pagó la suma de \$280.030.873 por concepto de pago de sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso de reparación directa No. 1995-15017. (fl. 47)

3.2. De la caducidad de la acción:

El Art 164 numeral 2 literal l) del C.P.A.CA dispone, 2 años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. (Ver art 192 ibídem).

Así las cosas se debe indicar que la demanda fue presentada el **2 de abril de 2018 (fl. 59)** ante el Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, y como se aporta la constancia del día en que se realizó el pago, esto es 30 de marzo de 2016 (fl. 47) por lo que no se encuentra configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, pues se radicó el día hábil siguiente al vencimiento de los 2 años que consagra la norma.

3.3. De la Conciliación Prejudicial

Según lo dispuesto en el art 161 numeral 1 del CPACA no es requisito de procedibilidad agotar el requisito conciliación prejudicial, a su vez debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la sentencia C-111 de 1999 y el art 37 de la Ley 640 del 2001.

3.4. Requisitos adicionales

Para que proceda esta acción debe existir un fallo condenatorio contra la entidad pública responsable o un auto aprobatorio de la conciliación o acta de conciliación u otro documento que acredite el arreglo –contrato de transacción-, y es indispensable que el valor de la condena o de la conciliación haya sido cancelado (Art. 161 numeral 5 del C.P.A.C.A.).

En relación con lo anterior, al observar el material probatorio arrimado en el libelo, se encuentra copia de las siguientes providencias:

- Sentencia de 31 de agosto de 2015 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” (fls. 29 - 45).

Con la documental aportada se cumple con los requisitos adicionales requeridos en la demanda.

3.5. Legitimación por activa:

Los únicos legitimados para iniciar la acción de repetición son la entidad directamente perjudicada, el Ministerio Público y Ministerio de Justicia, este último frente a entidades del orden nacional. En este caso quien interpone la demanda es el Hospital San Rafael, entidad directamente perjudicada, a través de apoderado judicial, por lo que se puede concluir que esta legítimamente facultado para interponer el presente medio de control.

3.6. Legitimación por pasiva:

La Constitución Política consagró que el Estado podrá repetir contra un agente suyo. Son agentes del Estado los Servidores Públicos tales como: miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y los particulares que desempeñen funciones públicas.

En el presente asunto la demanda está dirigida en contra de los señores Pedro Enrique Jiménez Farfán, Saulo Guarín Cortés y Germán Camargo Suárez, profesionales de la medicina vinculados a la ESE demandante.

3.7. De la legitimación para demandar y la representación judicial:

Interpone la demanda el Hospital San Rafael de Tunja, presuntamente afectado quien otorga poder a favor del abogado Elmer Ricardo Rincón Plazas identificado con la C.C. 1.057.590.689 de Sogamoso y T.P. 241.414 del C.S. de la J, aceptado en la forma prevista en el artículo 74 del C.G.P.; como quiera que cumple con los

requisitos legales se le reconocerá personería para actuar como apoderado de la parte actora.

3.8. Del contenido de la demanda y sus anexos:

En el presente caso se cumple con lo dispuesto en el artículo 162, 163 y 166 del C.P.A.C.A., esto es, en cuanto al contenido de la demanda, la individualización de las pretensiones, y los anexos de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, la demanda resulta admisible por reunir los requisitos legales, por lo que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR, con conocimiento en primera instancia, la demanda presentada por la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, en contra de los señores Pedro Enrique Jiménez Farfán, Saulo Guarín Cortés y Germán Camargo Suárez a través del medio de control de repetición.

SEGUNDO: Notificar personalmente esta decisión a los señores Pedro Enrique Jiménez Farfán, Saulo Guarín Cortés y Germán Camargo Suárez, a través de la dirección señalada por la parte demandante en el acápite de notificaciones de la demanda.

TERCERO: Para la práctica de la notificación de la demandada se procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso.

CUARTO: Notificar personalmente este proveído al señor Agente del Ministerio Público a través de la dirección de correo electrónico procjudadm177@procuraduria.gov.co, de conformidad con lo establecido en el inciso 6° del artículo 199 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Los gastos procesales que genera la práctica de la notificación personal, correrán a cargo de la parte interesada. Por consiguiente el apoderado de la parte accionante dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este auto, deberá retirar y remitir los oficios a quienes van dirigidos previa elaboración de los mismos por parte de la Secretaría. Surtido lo anterior deberán ser entregadas en el Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, las constancias de envíos y/o radicación para ser incorporadas al expediente.

SEXTO: Una vez cumplido lo anterior, se correrá traslado a la demandada, por el término de treinta (30) días para los fines establecidos en el Art. 172 del C.P.A.C.A. No obstante, este traslado no empezará a correr hasta el vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación, de conformidad con lo establecido en el inciso 5° del artículo 199 ibídem.

SÉPTIMO: La parte actora deberá tener en cuenta que el traslado establecido en el párrafo segundo del artículo 175 del C.P.A.C.A mediante el cual se corre traslado de las excepciones propuestas por los demandados, servirá para los efectos establecidos en el numeral 1 del artículo 101 del Código General del Proceso, es

decir, para subsanar aquellas falencias que han sido advertidas en la contestación de la demanda y que son el sustento de las excepciones previas de carácter dilatorio que se hayan podido proponer.

OCTAVO: RECONOCER personería al abogado ELMER RICARDO RINCÓN PLAZAS identificado con la C.C. 1.057.590.689 y T.P. 241.414 del C.S. de la J, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y que obra a folio 1.

NOVENO: Hacer los registros pertinentes en el Sistema de Información Judicial.

Notifíquese y cúmplase.

LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
Juez

ms.

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRONICO</p> <p>N° 24 De Hoy 4 de mayo de 2018 A LAS 8:00 a.m.</p> <p>FERNEY MAURICIO DIAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO</p>
--